



## RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 270 - 2018 - GRJ/GRI  
Huancayo, 31 JUL 2018

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

### VISTO:

El Informe Legal N° 393-2018-GRJ/ORAJ de fecha 19 de julio de 2018; El Recurso de apelación contra la Resolución Directoral Regional N° 0092-2018-GRJ-DRTC/DR de fecha 30 de enero del 2018, interpuesto por la Sra. FLOR DE MARIA MELYN CAMPOS, y;

### CONSIDERANDO:

Que, con fecha 01 de diciembre del 2017, los inspectores de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, levantaron el acta de control N° 1898, en cumplimiento de sus funciones conforme permite y establece el Decreto Supremo N° 017-2009-MTC y sus modificatorias; Intervinieron al vehículo de placa de Rodaje N° D4S-956, en el operativo llevado a cabo en las calles Evitamiento y Castilla, al momento de la intervención se detectó que el mencionado vehículo perteneciente a la Empresa de Transportes y Servicios Múltiples SAMI S.A.C., venía prestando su servicio de transporte público en el local ubicado al costado del Colegio Andrés Bello, local que utiliza dicha empresa como terminal informal, siendo víctimas de agresiones verbales y físicas los inspectores intervinientes. Asimismo, la referida acta de control indica que el mencionado vehículo no cuenta con tarjeta de circulación y mucho menos cuenta con habilitación, negándose a proporcionar los mencionados documentos. Por consiguiente, incurrió en la infracción tipificada con el código C.4.b de Anexo 1 (Tabla de Incumplimiento de las Condiciones de Acceso y Permanencia y sus Consecuencias), del mencionado Decreto Supremo N° 017-2009-MTC y sus modificatorias, al haberse incumplido lo dispuesto por el numeral 4.1.3.1 del artículo 41° del mismo cuerpo legal.

Que, con fecha 28 de diciembre del 2017, la Sra. FLOR DE MARÍA MELYN CAMPOS CURILLA –en adelante la impugnante- Gerente General de la EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS MÚLTIPLES SAMI S.A.C., presenta sus descargos contra el acta de control N° 1898. Dichos descargos son resueltos mediante Resolución Directoral Regional N° 0092-2018-GRJ-DRTC/DR de fecha 30 de enero del 2018, sancionándose a la mencionada empresa con la suspensión de su habilitación vehicular por 90 días, para prestar el servicio de transporte terrestre en la ruta autorizada, por haber infringido lo dispuesto en el artículo 41 numeral 41.1.3.1, consecuentemente el código de infracción C.4b de Tabla de Incumplimiento de las Condiciones de Acceso y

G. R. I.	
REG. N°	2798287
EXP. N°	1821231



Permanencia y sus Consecuencias, reguladas en el D.S. 017-2009-MTC y sus modificatorias.

Que, con fecha 27 de febrero del 2018, la impugnante interpone recurso de reconsideración contra la Resolución señalada en el considerando anterior. En ese sentido, mediante Resolución Directoral Regional N° 364-2017-DRTC/DR de fecha 05 de abril del 2018, se resuelve el mencionado recurso de reconsideración, siendo declarado infundado, por no haberse presentado nueva prueba como señala el artículo 208° de la Ley 27444.

Que, con fecha 17 de mayo del 2018, la impugnante interpone recurso de apelación contra la Resolución Directoral Regional N° 364-2017-DRTC/DR, manifestado que no existe una precisión en la supuesta conducta incumplida, pues el inspector de transportes ha consignado en el acta de control N° 1898, más de un incumplimiento que no guarda relación con la tipificación establecida en el código C.4b ni con el numeral indicado, no ha cumplido con el protocolo de intervención en caso de incumplimientos, que es la de ser exactos y precisos en la verificación de los supuestos incumplimientos, puesto que el mencionado vehículo no pertenece a su empresa, tal como ha demostrado en su descargo, con la consulta SUNARP y la boleta informativa que dicho vehículo pertenece a la Empresa de Transportes Gonzales E.I.R.L. y que si bien es cierto se observa que el vehículo pintado con su logotipo, no es su responsabilidad por hacer uso indebido de su logotipo y por tanto debe asumir la empresa al cual pertenece. De igual manera, señala que no se ha cumplido con el debido procedimiento establecido en el numeral 103.1 del artículo 103° del RNAT, sobre el incumplimiento detectado, pues no se ha otorgado el plazo de Ley a su representada para corregir el incumplimiento detectado.

Que, considerando que es deber de todo órgano decisor, en cautela del debido procedimiento, resolver la controversia puesta a su conocimiento según el mérito de lo actuado, y habiéndose procedido a la valoración de los documentos y actuaciones que obran en el expediente, corresponde efectuar el análisis del recurso de apelación ahora propuesto por la impugnante, en tal sentido, resulta importante tener presente que en el Estado Constitucional Democrático, el poder público está sometido al Derecho, lo que supone, entre otras cosas, que la actuación de la Administración deberá dar cuenta de esta sujeción a fin de despejar cualquier sospecha de arbitrariedad. Para lograr este objetivo, las decisiones de la Administración deben contener una adecuada motivación, tanto de los hechos como de la interpretación de las normas o el razonamiento realizado por el funcionario o colegiado, de ser el caso.

Que, la naturaleza jurídica del recurso de apelación es que se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse y presentarse ante la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico, tal como está prescrito por el artículo





"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

209° de la Ley N° 27444, la misma que tiene por finalidad exigir al superior jerárquico una revisión de lo hecho y lo resuelto por su subordinado.

Que, el Reglamento Nacional de Administración de Transportes, aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, en adelante RNAT, es uno de los reglamentos nacionales derivados de la Ley N° 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; que tiene por objeto regular la prestación del servicio de transporte público y privado de personas, mercancías y mixto en ámbitos nacional, regional y provincial, estableciendo las condiciones de acceso y permanencia de carácter técnico, legal y operacional, que deben cumplir los operadores prestadores del servicio.

Que, el numeral 3.39 del artículo 3° de la misma norma, en relación a la Infracción, señala: "Se considera infracción a las normas del servicio de transporte a toda acción u omisión expresamente tipificada como tal en el presente Reglamento", teniendo como premisa que toda infracción debe estar tipificada de manera expresa, tenemos que el Artículo 98° de la misma norma, sobre las Infracciones, señala:

*"98.1. Las infracciones al servicio de transporte se clasifican en los siguientes tipos:*

*98.1.1. Infracciones contra la formalización del transporte.*

*98.1.2. Infracciones contra la seguridad en el servicio de transporte.*

*98.1.3. Infracciones a la información y documentación."*

Bajo esa lógica, las infracciones se encuentran debidamente tipificadas en el Anexo 2 de la Tabla de Infracciones y Sanciones del RNAT, de acuerdo a la clasificación mencionada

Que, el numeral 3.38 del artículo 3° del RNAT, referido al Incumplimiento, señala: "Se considera incumplimiento a la inobservancia o contravención de las condiciones de acceso y permanencia previstos en este Reglamento.", en concordancia con lo dispuesto por el Artículo 95° del mismo cuerpo normativo, sobre los Incumplimientos: El incumplimiento de las condiciones de acceso y permanencia es de una sola clase y determina la sanción que corresponda, como consecuencia de un procedimiento administrativo sancionador.

Que, la impugnante manifiesta que no existe una precisión en la supuesta conducta incumplida, pues el inspector de transportes ha consignado en el acta de control N° 1898, más de un incumplimiento que no guarda relación con la tipificación establecida en el código C.4b ni con el numeral indicado, no ha cumplido con el protocolo de intervención en caso de incumplimientos, que es la de ser exactos y precisos en la verificación de los supuestos incumplimientos. Sin embargo debemos aclararle que la referida acta de control, es el documento levantado por el inspector de transporte en la que se hace constar los resultados de la acción de control, consignando no solo el incumplimiento detectado y su tipificación, sino todos los hechos recogidos en la intervención, es por ello que el inspector señala todo lo apreciado, realizando un detalle preciso y sobre las



*"Año del Buen Servicio al Ciudadano"*

conductas encontradas, por consiguiente la impugnante no puede alegar que se halla impuesto de manera defectuosa, pues se logra apreciar de manera indubitable que se ha transgredido el numeral 41.3.1 del artículo 41° del RNAT, por lo tanto acarrea el incumplimiento tipificado con el código C.4b del mismo cuerpo legal y en virtud de dicha evidencia se inicia el presente procedimiento administrativo sancionador.

Que, de igual manera la impugnante señala que el vehículo de placa de Rodaje N° D4S-956 no pertenece a su empresa, tal como ha demostrado en su descargo, con la consulta SUNARP y la boleta informativa que dicho vehículo pertenece a la Empresa de Transportes Gonzales E.I.R.L. y que si bien es cierto se observa que el vehículo pintado con su logotipo, no es su responsabilidad por hacer uso indebido de su logotipo y por tanto debe asumir la empresa al cual pertenece. Al respecto debe indicarse que dichos argumentos no son contundentes para demostrar que dicho vehículo no pertenece a su empresa, pues de la revisión de los actuados se aprecia que se le intervino en la estación de ruta informal que utiliza su empresa, en la cual habían más vehículos portando su logo, además resulta cuestionable que la impugnante refiera que no es su responsabilidad que hagan uso de la imagen de su empresa, cuando al hacer uso de ella infringen la norma de transportes, más aun que no haya tomado acciones contra la empresa de transportes GONZALES E.I.R.L. por presuntamente haber utilizado su logo para prestar el servicio de transportes, pues nadie en su sano juicio permitiría tal accionar, resultando irrelevante los argumentos utilizados en este extremo. De igual forma debe indicarse que los documentos presentados tiene como fecha 28/12/2017, y estos tardan alrededor de un mes o más en actualizarse en la el sistema de la SUNARP.

Que, la impugnante refiere que las acciones cometidas al momento de intervención tienen como naturaleza de incumplimientos de las condiciones de acceso y permanencia al servicio de transporte, por ello al amparo del numeral 103.1 del artículo 103° del RNAT, se le debió notificar con precisión el incumplimiento detectado y la cita legal de la parte pertinente del presente Reglamento y/o de sus normas complementarias que corresponda, para que cumpla con subsanar la omisión o corregir el incumplimiento detectado, o demuestre que no existe el incumplimiento según corresponda. Para ello se otorgará un plazo mínimo de cinco (5) días y un máximo de treinta (30) días calendario. Al respecto de ello, debemos aclarar que el numeral 103.1 del artículo 103° otorga al transportista y/o conductor la posibilidad de subsanar la omisión o corregir el incumplimiento detectado o de ser el caso demostrar que no existe dicho incumplimiento, sin embargo en el caso concreto no se ha otorgado tal derecho a la impugnante para que pueda demostrar que no incurrió en el supuesto mencionado, afectándose con ello su derecho de defensa y debido procedimiento.

Que, al amparo del numeral 103.1 del artículo 103° del RNAT, la DRTC debió otorgarle el plazo legal contemplado en el referido numeral, para que la





"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

impugnante pueda subsanar la omisión o corregir el incumplimiento detectado, o demuestre que no existe el incumplimiento según corresponda, ello a fin de respetarse su derecho contenido en el artículo 139, inciso 3) de la Constitución, establece como derecho de todo justiciable y principio de la función jurisdiccional la observancia al debido proceso, siendo este atributo por lo demás y de cara a lo que establece la jurisprudencia, admite dos dimensiones, una formal o procedimental y otra de carácter sustantivo o material. Mientras que en la primera, el debido proceso está concebido como un derecho que abarca diversas garantías y reglas que garantizan un estándar de participación justa o debida durante la secuela o desarrollo de todo tipo de procedimiento (sea judicial, administrativo, corporativo particular o de cualquier otra índole), en la segunda exige que los pronunciamientos o resoluciones con los que se pone fin al proceso respondan a un referente mínimo de justicia o razonabilidad.

Que, sin perjuicio de lo mencionado precedentemente se evidencia que se ha incurrido en el supuesto de nulidad previsto en el numeral 2) del Artículo 10° de la Ley N° 27444, al haberse observado que existen vicios que causan su nulidad de pleno derecho, como es el defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, (...)", por lo tanto resulta necesario remitirnos a los regulado por el artículo 3° de la misma Ley, establece que son requisitos de validez de los actos administrativos, la competencia, el objeto o contenido, la finalidad publica, motivación, procedimiento regular. En tendiéndose que antes de la emisión del acto administrativo, se debió cumplir con todas las acciones que requiere el procedimiento administrativo, previo para su generación, hecho que ha sido vulnerado al no haberse respetado el derecho de defensa y debido procedimiento, por lo tanto debe declararse fundado en parte el recurso de apelación planteado por la impugnante, nula la Resolución Directoral Regional N° 364-2017-DRTC/DR de fecha 05 de abril del 2018 y retrotraerse todo lo actuado, hasta la etapa que se vuelva a notificar otorgándosele el plazo legal contemplado en el referido numeral 103.1 del artículo 103° del RNAT, para que la impugnante pueda subsanar la omisión, corregir el incumplimiento detectado, o demuestre que no existe el incumplimiento según corresponda, respetándose el debido procedimiento administrativo y en observancia de las normas citadas precedentemente.

Por los fundamentos expuestos en el presente y contando con el visado de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el literal d) Artículo 21° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867 y sus modificatorias:

#### **SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- FUNDADO EN PARTE** El recurso de apelación interpuesto por la Sra. FLOR DE MARÍA MELYN CAMPOS CURILLA, Gerente General de la EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS MÚLTIPLES SAMI S.A.C., contra la Resolución Directoral Regional N° 0092-



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

2018-GRJ-DRTC/DR de fecha 30 de enero del 2018, y declárese **NULO** todo lo actuado; conforme a las consideraciones expuestas.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- RETROTRAER**, el procedimiento hasta la etapa que se hasta la etapa que se vuelva a notificar con precisión el incumplimiento detectado; otorgándosele el plazo legal contemplado en el referido numeral 103.1 del artículo 103° del RNAT, para que la impugnante pueda subsanar la omisión, corregir el incumplimiento detectado, o demuestre que no existe el incumplimiento según corresponda, respetándose el debido procedimiento administrativo y en observancia de las normas citadas precedentemente, conforme a las consideraciones expuestas. Debiendo su despacho tomar la decisión final que corresponda, con el propósito que emita el acto administrativo que le incumbe conforme a su discrecionalidad y facultades.

**ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR**, copia de la presente Resolución, al administrado, a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Junín y a los demás órganos competentes del Gobierno Regional Junín.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

  
ING. ALFREDO POMA SAMANEZ  
Gerente Regional de Infraestructura  
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
Lo que transcribo a Ud. para su  
conocimiento y fines pertinentes

HYO.

31 JUL 2018

  
Abog. A. Antonieta Vidalon Robles  
SECRETARÍA GENERAL